

* 20200221255071 *

Al contestar por favor cite:
Radicado No. 20200221255071
Fecha: 22 -04-2020

Bogotá D.C.

Señor:

JUEZ CONSTITUCIONAL DE CONOCIMIENTO (REPARTO) – TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C.

REF. ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: SANDRA DEL CASTILLO ABELLA

ACCIONADO: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MANIZALES

Cordial saludo:

Celia Flor Ortega Trocha, mayor de edad y residente en la ciudad de Bogotá, actuando en mi condición de apoderada de FIDUPREVISORA S.A., sociedad de economía mixta, del sector descentralizado, del orden nacional, sometida al régimen industrial y comercial del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, constituida mediante Escritura Pública No. 25 del 29 de marzo de 1985 de la Notaría 33 del Circuito Notarial de Bogotá, transformada en Sociedad Anónima mediante Escritura Pública No. 0462 del 24 de enero de 1994 de la Notaría 29 del Circuito Notarial de Bogotá, y que actúa como parte accionante en la presente acción constitucional, conforme la sustitución de poder otorgada, respetuosamente acudo ante su honorable despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA**, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y en los Decretos reglamentarios No. 2591 de 1991, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, en contra **JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MANIZALES**, por la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, la libertad, igualdad y a la vida consagrados en la Constitución Política, y tomando como base los siguientes:

MEDIDA PROVISIONAL

Respetuosamente solicitamos la inaplicación de las órdenes de arresto emitidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado en contra de la Dra. Sandra del Castillo Abella, Directora de Prestaciones Económicas teniendo en cuenta que ya se dio cumplimiento al numeral segundo del fallo de tutela de fecha 1 de agosto de 2019, emitido por el Tribunal Superior de Manizales – Sala Penal y que no se realizó la respectiva individualización de los obligados a dar cumplimiento al fallo de tutela y por la vulneración al Derecho fundamental de la libertad, igualdad y a vida.

1

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.



HECHOS

- Mediante auto del 21 de junio de 2019, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales profirió fallo de primera instancia dentro de la acción constitucional de tutela identificada con el RAD. 2019-00059, donde decidió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y vida digna del señor JORGE ELIECER ALVARAN DIAZ, y ordenó lo siguiente:

ley, **RESUELVE: PRIMERO: TUTELAR** los derechos fundamentales de, **debido proceso, seguridad social y vida digna** del señor **JORGE ELIECER ALVARÁN ORTEGÓN**, vulnerados la FIDUPREVISORA y ASESORES EN DERECHO S.A.S. **SEGUNDO: ORDENAR** al mandatario de ASESORES EN DERECHO S.A.S y a la FIDUPREVISORA, en un plazo razonable que no exceda de dos meses, inicie actuación administrativa en la que se establezca con claridad el tiempo laborado por el señor **JORGE ELIECER ALVARÁN DÍAZ**, en LA FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIA S.A y, se determine el monto del bono pensional para el periodo del 07 de junio de 1983 al 14 de marzo de 1994, por lo expuesto en la parte motiva. **TERCERO: ORDENAR** a la FIDUPREVISORA S.A, que una vez se verifique el cumplimiento del numeral anterior, traslade el valor actualizado del BONO PENSIONAL a PORVENIR, para que se vea reflejado en la historia laboral del señor **JORGE ELIECER ALVARÁN DÍAZ**. **CUARTO: DESVINCULAR** a las demás accionadas, por lo expuesto en precedencia. **QUINTO: NOTIFICAR** la presente determinación. **SEXTO: INFORMAR** que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato (Artículo 31 Decreto 2591/91). **SÉPTIMO: ORDENAR** que en caso de no impugnarse la presente decisión, se remita a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión. **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MAURICIO BEDOYA VIDAL JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO**".

- El fallo anterior fue impugnado por Fiduprevisora S.A., en el sentido de que, no se mantuvo la vinculación de la Federación Nacional de Cafeteros, ya que esta es quien debe suministrar los recursos necesarios para efectuar cualquier pago, toda vez que el patrimonio autónomo no cuenta con recursos propios. El patrimonio autónomo se nutre mensualmente de los recursos que gira la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, y por lo tanto es imposible dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo sin suministro de los recursos.

En este punto resulta pertinente indicar que la FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN, se encuentra actualmente liquidada y por lo tanto Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del PA PANFLOTA, **NO ASUMIÓ LA POSICIÓN DE EMPLEADOR, NI ES EL SUBROGATARIO, CESIONARIO O SUCESOR PROCESAL** de la Extinta Compañía Inversiones de la Flota Mercante, ya que Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PA PANFLOTA, única y exclusivamente administra los recursos transferidos por la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad matriz remanente de la liquidación de la extinta CIFM, conforme lo establecido por la sentencia SU 1023 de 2001 promulgada por la honorable Corte Constitucional.

A su vez, hay que tener en cuenta que el vínculo entre FIDUPREVISORA S.A. y la Compañía Flota Mercante en Liquidación **ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CONTRACTUAL** y las obligaciones de la fiduciaria emanan del Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-0138, y por lo tanto su capacidad, facultades y obligaciones se encuentran enmarcados en el contenido del Contrato de Fiducia.

2. Posteriormente, mediante auto del 01 de agosto de 2019 el honorable Tribunal Superior de Manizales – Sala Penal, resolvió la impugnación presentada por Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA y decidió **modificar el numeral segundo del fallo de primera instancia**, en el sentido de **ordenar** a Fiduprevisora S.A., **la realización de cálculo actuarial correspondiente** al tiempo laborado por el Señor Alvaran Díaz en la extinta CIFM.
3. Lo ordenado en segunda instancia se centró en lo siguiente:

VERIFICADO
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
BOGOTÁ

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

✓ **SEGUNDO: ORDENAR** a la **FIDUPREVISORA**, que en el término de quince (15) contados a partir de la notificación de esta providencia, elabore el cálculo actuarial del periodo comprendido entre el siete (07) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta el tres (03) de septiembre de mil novecientos noventa (1990) a favor del señor **JORGE ELIECER ALVARÁN DÍAZ**, conforme a los documentos que

reposen en la hoja de vida del Accionante, por lo que una vez se haya realizado la estimación de los tiempos no cotizados, la Fiduciaria deberá remitir la información a **COLPENSIONES**.

✓ **TERCERO: ORDENAR** a **COLPENSIONES** que dentro de los diez (10) días siguientes al recibido del cálculo actuarial del señor **JORGE ELIECER ALVARÁN DÍAZ**, por parte de la **FIDUPREVISORA**, corrija la historia laboral del Accionante; y una vez lo realice, conforme al artículo 5 del decreto 3798 de 2003 actualice la información del Actor en el Sistema Interactivo de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público.

4. Frente al fallo de segunda instancia, esta entidad financiera presentó solicitud de modulación al numeral segundo, bajo los siguientes parámetros; en primer lugar, porque se omite tener en cuenta que los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo PANFLOTA, son girados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, es decir, el Juez constitucional no responsabilizó en ninguna forma o vinculó a la mencionada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, por lo cual se hace estrictamente necesario su vinculación, dado que, de no establecerse las ordenes en la forma como es procedente (Asesores en Derecho, como mandataria con representación del PANFLOTA = cálculo actuarial // Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA = pago, una vez gira los recursos la FEDERACIÓN) y de no existir orden alguna en contra de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, no será posible legal y materialmente realizar el pago ordenado en el fallo de tutela.

Por otro lado, el objeto del contrato limita la capacidad que tiene la Fiduciaria como administradora y vocera del patrimonio autónomo PANFLOTA, (Contrato De Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pagos No. 3-1-0138 de 2006) en cuanto solo puede realizar los pagos de mesadas pensionales y de los aportes a la EPS, estando fuera de su órbita lo pretendido por el accionante y lo ordenado en el fallo de tutela que fundamenta la solicitud de modulación, en relación con la Fiduciaria.

Es importante resaltar que tanto Fiduprevisora S.A., como administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, y Asesores en Derecho S.A.S., como Mandataria con representación del PANFLOTA, cumplen cada una con funciones y obligaciones distintas, que si bien se originan y complementan en un mismo hecho, no significa que Fiduprevisora S.A., como administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, tenga la facultad u obligación de reconocer una prestación social, ni que Asesores en Derecho, como mandataria con representación del PANFLOTA, tenga la facultad u obligación de realizar pagos.

Cada una tiene funciones y obligaciones distintas y por lo tanto la orden del Juez constitucional no las puede responsabilizar frente a lo mismo, indistintamente de la calidad que cada una ostenta.

Por otro lado, para el caso que nos ocupa es necesario advertir que mi representada no podrá ni deberá salir al pago de lo reclamado por el actor, pues existe un Patrimonio Autónomo denominado PANFLOTA, el cual se nutre y recibe recursos de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, y cuyo objeto es único e inmodificable, y en ese entendido, no podrá mi representada salir al pago de obligación alguna como en la forma como lo establece el fallo de tutela del cual se solicita la modulación, ya que la constitución del Patrimonio Autónomo se dio con el ÚNICO y EXCLUSIVO FIN de administrar ciertos recursos y destinarlos, EXCLUSIVAMENTE, al pago de las mesadas pensionales de los ex trabajadores de la extinta CIFM y sus beneficiarios reconocidos previo y durante el proceso de liquidación de la CIFM y al pago de los aportes de seguridad social a las respectivas EPS's.

Si observamos lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia, resulta evidente la omisión frente a que los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo PANFLOTA, son girados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, no responsabilizó a en ninguna forma o mantuvo vinculada a la mencionada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, por lo cual se hace estrictamente necesario su vinculación, dado que, de no establecerse las ordenes en la forma como es procedente (Asesores en

Derecho, como mandataria con representación del PANFLOTA = cálculo actuarial // Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA = pago, una vez gira los recursos la FEDERACIÓN) y de no existir orden alguna en contra de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, no será posible legal y materialmente realizar el pago ordenado en el fallo de tutela.

En consecuencia, existía una imposibilidad jurídica por parte de esta Entidad Financiera para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de fecha 1 de agosto de 2019 proferido por el Tribunal Superior de Manizales, el cual ordena a Fiduprevisora como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, realizar el cálculo actuarial del periodo comprendido entre el 07 de junio de 1983 y hasta el 03 de septiembre de 1990 a favor del Señor Jorge Eliecer Alvaran Diaz, por lo tanto, conforme las condiciones contractuales estipuladas a través del negocio de fiducia mercantil No. 3-1-0138 de 2006 suscrito entre la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el cual establece que la FIDUCIARIA DEBERÁ PAGAR LAS OBLIGACIONES, ENTIENDASE MESADAS PENSIONALES Y PAGO DE LOS APORTES A LAS ESPS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN RECURSOS SUFICIENTES PARA EL EFECTO EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL EXTRABAJADOR SE ENCUENTRE DENTRO DEL ANEXO 1 Y ÚNICAMENTE EN CUMPLIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL LIQUIDADOR, HOY EL MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN.

5. Frente a la solicitud de modulación del numeral segundo del fallo de tutela, el Juzgado Penal del circuito Especializado de Manizales, no accedió indicando que no tiene competencia para modular un fallo de tutela proferido por el superior jerárquico, es decir, el Tribunal Superior de Manizales - Sala Penal, en consecuencia, procedimos no solo a reiterar nuestra solicitud de modulación ante el juzgado de origen, si no, a solicitar al Tribunal, que modulara el fallo, teniendo en cuenta lo siguiente:

6. La honorable Corte Constitucional, mediante sentencia T-086 de 2003, estableció como no existe vulneración del principio de cosa juzgada cuando el juez de tutela modula las órdenes impartidas en el fallo, con la finalidad de proteger totalmente los derechos fundamentales que pueden estar siendo vulnerado; a su vez, declaró cuales son los requisitos para la procedencia de la modulación:

(...) Así pues, **cuando el juez de tutela resuelve amparar el derecho cuya protección se invoca, conserva la competencia para dictar órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden original siempre y cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para que se respete la cosa juzgada:**

(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque (a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o (c) **porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.**

(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado.

(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.

(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz. A estos cuatro requisitos de orden sustancial, se agregan otros de orden procesal, tal como se muestra en el siguiente apartado. (...) (negritas fuera de texto)

Con base en el aparte jurisprudencial transcrito, resulta evidente que la solicitud de modulación realizada cumplía con los requisitos establecidos por la Honorable Corte Constitucional, toda vez que lo ordenado a esta entidad financiera escapa de sus facultades, competencias, obligaciones como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA.

En primer lugar, se omite tener en cuenta que los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo PANFLOTA, son girados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, es decir, el Juez constitucional no responsabilizó en ninguna forma o vinculó a la mencionada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, por lo cual se hace estrictamente necesario su vinculación, dado que, de no establecerse las ordenes en la forma como es procedente (Asesores en Derecho, como mandataria con representación del PANFLOTA = cálculo actuarial // Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA = pago, una vez gira los recursos la FEDERACIÓN) y de no existir orden alguna en contra de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, no será posible legal y materialmente realizar el pago ordenado en el fallo de tutela.

Por otro lado, el objeto del contrato limita la capacidad que tiene la Fiduciaria como administradora y vocera del patrimonio autónomo PANFLOTA, (Contrato De Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pagos No. 3-1-0138 de 2006) en cuanto solo puede realizar los pagos de mesadas pensionales y de los aportes a la EPS, estando fuera de su órbita lo pretendido por el accionante y lo ordenado en el fallo de tutela que fundamenta la solicitud de modulación, en relación con la Fiduciaria.

7. El Tribunal Superior de Manizales, no accedió a lo pretendido aduciendo que esta Entidad Financiera pretendía con la solicitud de modulación, una tercera instancia a la acción de tutela, por su parte el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, no se pronunció frente a nuestro escrito.

No obstante, de solicitar la modulación del fallo de tutela, Fiduprevisora S.A., se encontraba adelantando acciones que, conforme el objeto del Contrato De Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pagos No. 3-1-0138 de 2006, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado.

8. En razón de lo anterior, dentro del trámite procesal de la acción constitucional identificada con el RAD. 2019-00059 se han presentado diversos requerimientos previos, los cuales, ésta Entidad Financiera ha atendido, informando al Juzgado su imposibilidad con el fin de dar cumplimiento, así como las acciones adelantadas para lograr tal fin.

Fiduprevisora S.A. no fue notificada de la apertura de formal de incidente de desacato o de la práctica de pruebas, fuimos notificados del escrito de fecha del 02 de marzo de 2019, auto 741 mediante el cual se decidió sancionar a los Drs. Carolina Pacheco Martínez, Sandra Del Castillo Abella, Jaime Abril Morales y Juan Alberto Londoño.

9. Como consecuencia de lo anterior, Fiduprevisora S.A. procedió inmediatamente a revisar, en el buzón de notificaciones judiciales de la Entidad (notjudicial@fiduprevisora.com.co), en el buzón donde previamente habíamos sido notificados de los requerimientos realizados dentro de este caso (tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co), así como en el Centro de Recursos de Información (CRI) ubicado en el primer piso del edificio de Fiduprevisora S.A., administrado actualmente por la empresa de mensajería REDSERVI, y donde se recibe la documentación proveniente de todos los despachos judiciales a nivel nacional, así como cualquier tipo de documentación dirigida a esta entidad financiera, dando como resultado que no encontramos notificación de la apertura formal de incidente de desacato y la práctica de pruebas.

10. De esta manera, mediante oficio No. 20200220896171 del 10 de marzo de 2020, Fiduprevisora S.A., entidad financiera que actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, solicitó al despacho accionado la nulidad de todo lo actuado desde el auto promulgado el 03 de marzo de 2020, por indebida individualización de los funcionarios a cargo de dar cumplimiento al fallo de tutela, toda vez que no se efectuó en debida forma la notificación del incidente de desacato y/o sanción promulgadas posteriormente, y por lo tanto se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y la libertad de los Dres. los Drs. Carolina Pacheco Martínez, Sandra Del Castillo Abella, Jaime Abril Morales y Juan Alberto Londoño en su calidad de funcionarios de la entidad.

En ese orden de ideas, debemos manifestar que las personas sancionadas dentro del presente trámite incidental, esto es, Carolina Pacheco Martínez, Sandra Del Castillo Abella y Jaime Abril Morales, no son las llamadas a dar cumplimiento al fallo de tutela, ya que sus funciones dentro de la entidad corresponden al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no al patrimonio Autónomo Panflota, por lo tanto, no tiene la competencia para dar cumplimiento a la Sentencia de fecha 01 de agosto de 2019, emitida por el Tribunal Superior de Manizales – Sala Penal.

11. Adicionalmente, mediante el oficio mencionado en el punto anterior, se informó al despacho sobre las actuaciones adelantadas por esta entidad financiera para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo, se adjuntaron las pruebas pertinentes, pero a la fecha el Juzgado no se ha manifestado frente a lo solicitado por esta Entidad Financiera.
12. El día 13 de marzo de 2020, nos fue notificado por parte del Tribunal Superior de Manizales – Sala Penal, la confirmación de las sanciones impuestas por el Juzgado de origen, frente a los funcionarios Sandra Del Castillo Abella y Jaime Abril, así:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión emitida por el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Manizales, Caldas mediante la cual sancionó a la Dra. **SANDRA MARÍA DEL CASTILLO ABELLA** Directora de Prestaciones Económicas de la FIDUPREVISORA y **JAIME ABRIL MORALES** Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales de esa Entidad a tres (3) días de arresto y multa equivalente a 2 SMLMV.

13. Frente a lo anterior, debemos informar que el Tribunal Superior confirmó y notificó la sanción el día 13 de marzo de 2020, es decir, posterior a la solicitud de nulidad presentada por Fiduprevisora S.A., y frente a la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, no se ha pronunció.
14. En este punto, debemos informar que, **ATENDIENDO LO ORDENADO**, esta Entidad, pese a que se encuentra imposibilitada a dar cumplimiento, ha procedido a realizar el cálculo actuarial ordenado en el numeral segundo del fallo de tutela de fecha 1 de agosto de 2019, proferido por el Tribunal Superior de Manizales, en acatamiento a la orden judicial, pues legalmente la obligación recae en cabeza de la Administradora del Fondo de Pensiones, por lo tanto y una vez analizados los documentos pertinentes para tal fin, se evidenció que no se cuenta con la fotocopia de la cedula del Señor Alvaran Díaz y con la historia laboral correspondiente de Colpensiones, ya que los mismos, no fueron aportados en el escrito de tutela, por este motivo se procedió, mediante comunicado 20200041001151 de fecha 18 de marzo de 2020, a solicitarlos al accionante; aquí se hace necesario resaltar que esta documentación es **INDISPENSABLE** para la elaboración y realización del cálculo actuarial.

En concordancia con lo anterior, una vez recibido los documentos por parte del Señor Alvaran Díaz, esta Entidad financiera, atendiendo lo ordenado, procedió a elaborar cálculo actuarial por omisión, y a su vez, dar traslado a Colpensiones mediante el radicado 20200041087511, de fecha 30 de marzo de 2020, para lo de su competencia; debemos indicar, que debido a la emergencia sanitaria Covid-19, y a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, el memorando y sus anexos, fueron enviado a los correos, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y notificacionestutelas@colpensiones.gov.co.

15. Las actuaciones antes mencionadas, fueron informadas a Juzgado Penal del Circuito Especializado, el día 31 de marzo de 2020, mediante radicado 20200221106791; sin embargo, el día 15 de abril de 2020, fuimos requeridos nuevamente para dar cumplimiento al fallo y en el mismo auto se informa que serán libradas las órdenes de captura en contra de la Dra. Sandra Del Castillo y el Dr. Jaime Abril; en ese orden de ideas, hemos evidenciado con total sorpresa, que este Despacho Judicial no ha dado trámite, ni ha resuelto lo manifestado por esta Entidad Financiera, no sólo en el informe de cumplimiento del fallo de fecha 31 DE MARZO DE 2020, así como tampoco el escrito de fecha 11 DE MARZO DE 2019, radicado 20200220896171, dentro del cual informamos que los funcionarios sancionados NO TIENEN COMPETENCIA para dar cumplimiento a lo ordenado, escrito que fue presentado con antelación a que se emitiera el auto de grado de consulta por el Tribunal Superior de Manizales, en el cual confirmaba la sanción.

En consecuencia, al no dar trámite a los anteriores escritos presentados, se denota una clara lesión a los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, igualdad y al debido proceso de los Dres. Sandra del Castillo y Jaime Abril, ya que en ambos escritos informamos que los funcionarios no tienen relación con el Patrimonio Autónomo Panflota. Pese a lo anterior, el Honorable Despacho no ha resuelto de fondo los escritos presentados y anteriormente señalados, librando así las órdenes de captura señaladas en el escrito de fecha 15 de abril de 2020, pese a que esta Entidad, reiteramos, ya informó el cumplimiento del fallo.

NORMAS CONSISTITUCIONALES VULNERADAS Y FINALIDAD DE LA ACCIÓN

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política; la presente acción de tutela tiene como finalidad obtener la protección inmediata del derecho constitucional que ha sido vulnerado, al no haber otorgado la posibilidad legal de ejercer su derecho de defensa previo a la interposición de una sanción por desacato al fallo promulgado dentro de la tutela identificada con RAD. 2019-00059, adicionalmente, no ha dado trámite a las solicitudes de cumplimiento del fallo presentadas por Fiduprevisora S.A., los días 31 de marzo de 2020 y 16 de abril de 2020, esto, teniendo en cuenta la importancia que cumplen dentro de la acción constitucional de la referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES

En primer lugar, resulta pertinente traer a colación los presupuestos o requisitos establecidos por la Honorable Corte Constitucional para la procedencia de tutela en contra de providencias judiciales. Para esto a continuación se transcriben aparte de la Sentencia T – 025 de 2018, donde se sintetizaron y/o reunieron apartes de otras sentencias promulgadas por el máximo organismo:

"(...) De conformidad con la línea jurisprudencial uniforme y actual de esta Corporación desde la sentencia C-590 de 2005, los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiaridad que caracteriza a la tutela, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla

el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencia de tutela (...)"

Conforme lo anterior, a continuación acoplamos cada uno de los requisitos enunciados al caso en concreto, con lo que se demuestra que la presente acción constitucional es procedente:

- (i) Relevancia Constitucional: Con el actuar desempeñado por el juzgado accionado, se vulneran el derecho fundamental al debido proceso y de defensa (Art. 29 de la Constitución Política) y el derecho a la administración de justicia (Art. 229 de la Constitución Política).
- (i) Subsidiaridad: Dentro del trámite constitucional identificado con RAD. 2019-00059 esta entidad financiera cumplió con manifestar y argumentar, en dos ocasiones, al despacho accionado las razones materiales, legales y constitucionales por las que se debe declarar la nulidad de la sanción interpuesta; despacho que negó la solicitud. Adicional a la solicitud que nosotros hacemos dentro del proceso, no existe otro mecanismo judicial contemplado en la normatividad que rige el trámite procesal de la acción constitucional de tutela, que permita conseguir la declaración de nulidad por indebida notificación dentro del trámite constitucional.
- (ii) Inmediatez: A pesar de que los hechos generadores de la vulneración de derechos fundamentales sucedieron el 03 y 18 de julio de 2018, se promueve hasta la fecha la presente acción de tutela en razón de los trámites adelantados por esta entidad para buscar que el despacho accionado declare la nulidad por indebida notificación, y el tiempo que dicho despacho ha tardado en dar respuesta a nuestras solicitudes.
- (iii) Irregularidad Procesal - Efecto decisivo: Adicional a la multa económica interpuesta con la sanción promulgada por el despacho accionado, el efecto de la vulneración al derecho fundamental al debido proceso y defensa, generado por el actuar y/o decisiones tomadas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado, es decisivo en el sentido que se establece que la Dra. Sandra del Castillo Abella, como Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Fiduprevisora S.A. y a su vez Fiduprevisora S.A., como administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, desacataron por culpa, negligencia y/u omisión lo ordenado en un fallo judicial, situación que afecta la reputación comercial de esta entidad que, contrario a lo establecido con la sanción, actúa en procura de adelantar las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a los fallos de tutela o trámites judiciales ordinarios donde es parte demandada, accionada o vinculada.
- (iv) Identificación de hecho: En el acápite de hechos se resumieron los sucesos que motivan la presente solicitud de amparo constitucional, y a lo largo del presente escrito se enuncian los

derechos fundamentales vulnerados.

- (v) No Sentencia de Tutela: La presente acción se dirige en contra de lo establecido mediante unos autos posteriores a las sentencias de primera y segunda instancia, y no contra dichas sentencias.

NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA YA QUE SE INCUMPLIÓ CON LA CARGA LEGAL DE REALIZAR EN DEBIDA FORMA LA NOTIFICACIÓN

No se garantizó el derecho de defensa de Fiduprevisora S.A., que actúa en calidad de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, ya que no se nos notificó en debida forma de la apertura de incidente y de la práctica de pruebas, imposibilitando así nuestra facultad de ejercer el derecho a la defensa consagrada en la carta política.

La notificación se erige como un acto procesal fundamental, estructurado bajo el debido proceso y de manera particular sobre el derecho de contradicción, como herramienta de defensa de los demandantes o accionados dentro de un proceso.

La notificación, entendida como el acto procesal de comunicación con que cuentan las autoridades para informar sus decisiones, representa **la génesis de la defensa** con la que cuentan las partes involucradas dentro de un trámite judicial, **por cuanto sin haberse realizado repercute de manera flagrante en todo el proceso.** Lo anterior atañe a que por parte de FIDUPREVISORA S.A. como entidad que actúa en calidad de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, **no fue notificada de la apertura de incidente de desacato ni de la práctica de pruebas y por ende hubo una evidente violación al debido proceso.**

Con fundamento en los presupuestos fácticos ya señalados y como se expondrá en el presente acápite, en la sanción interpuesta por la parte accionada se encuentra viciada de nulidad por violación al derecho de contradicción y defensa, esto conforme lo establecido en la Sentencia T-1263 de 2001, así:

*"La relación existente entre el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas reglas, tiene en el **derecho a la defensa el complemento necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad.** Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté debidamente enterada de las decisiones que en particular comprometen sus*

derechos, es un deber indeclinable de las autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la administración cumple con el principio de publicidad y garantiza con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa". (Resaltado nuestro)

Según se ha explicado por el mismo intérprete, para la exigibilidad de las obligaciones jurídicas en el evento del fallo positivo al amparo solicitado y para la conminación a su inexorable cumplimiento, así como para evitar la inhibición en las decisiones de tutela, se requiere de una completa y correcta identificación de los comprometidos responsables y que se les haya garantizado su derecho fundamental a la defensa. **Allí, se ha recurrido a la figura legal de "legitimidad en la causa por pasiva"[5] como principio básico del derecho procesal, para exigir la completa integración del contradictorio, so pena de nulidad en la actuación.**

"Según jurisprudencia reiterada de esta Corporación, cuando el demandante no integra la causa pasiva con todas aquellas entidades cuyo concurso es necesario para establecer la presunta amenaza o violación de los derechos alegados, es deber del juez constitucional proceder a su vinculación oficiosa a fin de garantizarles su derecho a la defensa y, en ese contexto, permitirle a la autoridad establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de controversia".

"La circunstancia específica de que cualquier persona este facultada para recurrir a ese mecanismo excepcional de amparo judicial, y el hecho de que su acceso no este condicionado por una eventual asistencia jurídica o una adecuada representación judicial, le impone al juez constitucional, en su condición de conocedor del derecho y de promotor e impulsor de la actuación, la obligación subsidiaria de corregir el yerro en que haya podido incurrir el actor al momento de definir el posible infractor de sus derechos. Solo de esta manera, puede considerarse agotado el presupuesto constitucional que inspiró la inclusión en el ordenamiento jurídico colombiano del mecanismo de amparo judicial, cual es el de la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales."

Debemos poner de presente a su Honorable Despacho que el incidente de desacato tiene que surtir con observancia de sus etapas procesales (requerimiento previo, apertura, notificación, decreto de pruebas), etapas que deben ser notificadas de manera personal al directamente afectado pues una omisión de tal tipo vulnera flagrantemente derechos fundamentales tales como, el debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, entre otros. Señaló la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de septiembre de 2014, rad. 75726:

“Si bien la jurisprudencia constitucional ha aceptado, tácitamente, que la individualización en el trámite del incidente de desacato se agota con señalar el cargo que ocupa la persona¹ y la manifestación de “o quien haga sus veces”, esta Sala hace énfasis en que la verificación de la responsabilidad subjetiva del incumplido, en consonancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, requiere la plena identificación (nombres y apellidos) del involucrado pues es sabido, que mediante el trámite incidental no se persigue a un cargo, sino a la persona que lo ostenta”.

En ese orden de ideas, debemos manifestar que las personas sancionadas dentro del presente trámite incidental, esto es, Carolina Pacheco Martínez, Sandra Del Castillo Abella y Jaime Abril Morales, no son las llamadas a dar cumplimiento al fallo de tutela, ya que sus funciones dentro de la entidad corresponden al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no al patrimonio Autónomo Panflota, por lo tanto, no tiene la competencia para dar cumplimiento a la Sentencia de fecha 01 de agosto de 2019, emitida por el Tribunal Superior de Manizales – Sala Penal.

En este punto, es indispensable resaltar que, de acuerdo al certificado de cámara de comercio, el correo para efectos de notificaciones judiciales es notjudicial@fiduprevisora.com.co, correo al cual nos fueron notificados tanto la admisión de la tutela, los fallos emitidos en primera y segunda instancia y los diferentes requerimientos, los cuales fueron atendidos en debida forma.

Conforme lo anterior, ha dicho el Consejo de Estado en sentencia de abril del 2018 donde se-
ñalo:

“El sujeto de una eventual sanción por desacato debe ser quien tenga la representación jurídica a la cual se le impartió la orden de amparo pues, es respecto de este que tendría el efecto persuasivo la imposición de la sanción”

Con fundamento en lo señalado, efectivamente ninguna de las providencias fueron notificadas a las personas encargadas del trámite, es decir, la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria, pues previo a la apertura e imposición de sanción alguna, el funcionario judicial ya debe contar con elementos de juicio suficientes para establecer en contra de que funcionario(s) dirigirá sus facultades disciplinarias como juez constitucional de amparo; en efecto, no se hizo un estudio acucioso frente a la demostración de responsabilidad subjetiva, pues recuérdese que el incidente de desacato no puede basarse exclusivamente en la demostración del incumplimiento de la orden, sino que

¹ Sentencias T-053 de 2005 y T-343 de 2011.

exige una demostración inequívoca respecto al capricho y desatención de la persona encargada para acatar el fallo.

DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA COMO GARANTÍA PROCESAL

En lo que respecta al derecho a la defensa, del cual FIDUPREVISORA S.A., como entidad financiera que actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio Autónomo Panflota, **NO** tuvo la oportunidad procesal de ejercer su Derecho Constitucional establecido en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política, por lo que es pertinente traer a colación lo establecido por la Corte Constitucional Sentencia C-025/09 ha manifestado que:

Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.

En Sentencia C-034/14 la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente forma:

"(...) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos"...

...“Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción”[14] | 5.5. En el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso

administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso"....(Subrayado fuera de Texto).

Por consiguiente, solicitaremos muy respetuosamente al Honorable Tribunal, con base en la argumentación planteada, declarar procedente la presente acción constitucional y la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 03 de marzo de 2019, dentro de la tutela identificada con RAD. 2020-00059, seguida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales por haberse desconocido por parte del juzgado accionado la normatividad legal y Constitucional, es decir al debido proceso y a la administración de justicia, derechos fundamentales establecidos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.

ANEXOS

1. Copia del contrato de mandato 9264-001-2014 suscrito entre Fiduprevisora S.A., como administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, y Asesores en Derecho S.A.S.
1. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre SECTESA S.A (hoy IRON MOUNTAIN) y Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A en liquidación, No. CS-935
2. Copia del memorando 20200041001151 de fecha 18 de marzo de 2020, dirigido al señor Jorge Eliecer Alvaran Diaz.
3. Copia de los memorandos 20190041950061 y 201911583528 de fecha 27 de agosto de 2019, dirigidos a Colpensiones.
4. Copia del memorando 20190041949641, de fecha 27 de agosto de 2019, dirigido a Asesores en Derecho.
5. Copia del memorando 20190042701981, de fecha 27 de noviembre de 2019, dirigido a Porvenir.
6. Copia del memorando 20200040780871, de fecha 27 febrero de 2020, dirigido a Porvenir.

* 20200221255071 *

Al contestar por favor cite:
Radicado No. 20200221255071
Fecha: 22 -04-2020

7. Copia del memorando 20200041001151 de fecha 18 de marzo de 2020, dirigido al Señor Alvaran Diaz.
8. Copia del memorando 20200041087511, de fecha 30 de marzo de 2020, dirigido a Colpensiones.
9. Los que obran en el expediente, aportados con la contestación a la admisión de la acción constitucional de la referencia y relacionados en el fallo por el Juez de Primera instancia.

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no he instaurado Acción de Tutela con base en los hechos plasmados en el presente documento.

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

La tiene el Tribunal Administrativo por mandato constitucional, el procedimiento es breve y sumario, reglado por los Decretos 2591 de 1991 y su Decreto Reglamentario 306 de 1992, el Decreto 1382 de 2000 y el numeral quinto del artículo primero del Decreto 1983 de 2017.

PRETENSIONES

1. Tutelar el derecho fundamental del debido proceso y acceso a la administración de justicia de la Dra. Sandra del Castillo Abella consagrado en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, y que actualmente está siendo vulnerado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales.
1. Ordenar al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales que declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto promulgado el 03 de marzo de 2020, dentro de la tutela identificada con RAD. 2019-00059, por indebida notificación y vulneración al derecho fundamental al debido proceso de Jaime Abril y de esta entidad financiera.
2. Como consecuencia de lo anterior se ordené al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales levantar o cancelar la orden de arresto impartida contra la Dra. Sandra del Castillo Abella.

18

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

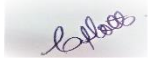


* 20200221255071 *

Al contestar por favor cite:
Radicado No. 20200221255071
Fecha: 22 -04-2020

NOTIFICACIONES

1. La entidad recibirá notificaciones en la calle 72 No. 10 – 03 piso 6, Bogotá D.C. Teléfono: 5945111 ext. 1435 y 2511 – Correo electrónico: notjudicial@fiduprevisora.com.co.
1. La parte accionada recibirá notificaciones en la dirección: pesp01ma@cendoj.ramajudicial.gov.co



CELIA FLOR ORTEGA TROCHA
Profesional de Procesos Judiciales y Administrativos
Fiduprevisora S.A.
Elaboró: Celia Ortega
Oríen: 33881
Correo: notjudicial@fiduprevisora.com.co
Anexo lo enunciado

VERIFICADO
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
BOGOTÁ

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

